

101 de la misma, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez primer suplente de Distrito de Sinaloa en 21 de Agosto del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Francisco Cañedo, contra el veredicto que el jurado de sentencia pronunció en la ciudad de Culiacan el 3 de Mayo último, condenándolo á seis meses de prision.—Devuélvase las actuaciones al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Febrero de 1874.  
—*Emilio Ordaz*, oficial mayor.

## COMPETENCIA.

*Iniciada por el Juzgado 3º de lo criminal de México, al C. Prefecto político de Guadalupe Hidalgo, para conocer de la causa que se ha instruido contra Dionisio Chavez, acusado del delito de robo con asalto y en despoblado.*

### PEDIMENTO DEL C. FISCAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

El Fiscal dice: que el Juzgado 3º de lo criminal de esta Capital, ha iniciado competencia al C. Prefecto político de Guadalupe Hidalgo, para conocer de la causa que

se ha instruido contra Dionisio Chavez, acusado del delito de robo con asalto y en despoblado, cuya causa ha seguido dicha Perfectura en virtud de la jurisdiccion que para ello le dá la ley de 3 de Mayo próximo pasado.

La primera cuestion que desde luego surge, es la de si esa Suprema Corte tiene ó nó facultad para dirimir el conflicto jurisdiccional que se ha iniciado entre las expresadas autoridades.

En efecto, la Suprema Corte, en materias de competencia de jurisdiccion, deriva la suya del artículo 99 de la Constitucion general de la República, y despues de la fraccion 3ª artículo 13 capítulo 2º de su reglamento particular.

Pues bien, el primero de los artículos citados dice: "Corresponde á la Suprema Corte de Justicia dirimir las competencias que se susciten entre los Tribunales de la Federacion, entre estos y los de los Estados, ó entre los de un Estado y los de otro." Segun este texto que así limita y circunscribe las atribuciones de la Corte en un punto tan delicado como es el de fijar la jurisdiccion de un tribunal, para conocer tal vez y como sucede en el presente de un negocio tan grave como es la vida de un hombre, el cual cuenta en su abono las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 del Código fundamental, ¿en que miembro de la division ó clasificacion que marca el artículo 99 transcrito, puede considerarse comprendida la Gofatura política de Guadalupe, para así concluir que esa 1ª Sala conforme al artículo citado de su reglamento, pueda fallar y decidir cual sea la autoridad competente para juzgar á Dionisio Chavez? La clasificacion del artículo constitucional comprende tres casos: 1º competencia entre tribunales de la federacion; 2º competencias entre estos y los de los Estados; 3º competencias entre los tribunales de los mismos. Simplificando aun mas, la Constitucion prevee las competencias entre tribunales federales y tribunales de los Estados.

En consecuencia, para que esa Suprema Corte tenga jurisdiccion legal para ocuparse del presente conflicto, es necesario dar á la Prefectura de Guadalupe Hidalgo el carácter, ó de Tribunal federal ó de Tribunal de un Estado. Lo primero no es posible, porque bajo el nombre de Tribunales de la Federacion se comprenden única y exclusivamente, los instituidos para conocer de las causas y negocios en que la Federacion es parte, y se conocen con el nombre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, decreto de 21 de Abril de 1827; y ciertamente las Prefecturas políticas de los Distritos, tan lejos estan de ser Tribunales Federales, cuanto que ellas forman parte de ese otro poder del Estado, ajeno del judicial y al que los publicistas llaman Poder Ejecutivo, Poder administrativo. Pudiera decirse que esa ley de 3 de Mayo último, por el mismo hecho de investir de cierta autoridad á las Prefecturas políticas, les dá de alguna manera el carácter de federales; pero á ello se opone el artículo 6º de esa misma ley que á la letra dice: "Las autoridades de los Estados no se reputan federales por el hecho de aplicar la presente ley;" con prevencion tan expresa y terminante, no es posible dar á la Prefectura política de Guadalupe Hidalgo, el caracter de Tribunal Federal. Mas bien por el conteste mismo de la ley de 3 de Mayo citado, parece que el legislador no quiso dar á las Prefecturas políticas otro carácter que el de tribunales ordinarios ó comunes; y en tal sentido, se les debe considerar como Juzgados del fuero comun, y por una razon de analogía, en el caso de iniciar competencia á otro igualmente del fuero comun, y los dos situados en una misma comprension judicial, deben ocurrir al Tribunal Superior de Justicia de esa comprension, para que la dirima.

Esta doctrina pudiera en el caso especial que nos ocupa, apoyarse con la fraccion 2ª artículo 18 capítulo 2º del Reglamento del Tribunal Superior del Distrito, el cual al clasificar sus atribuciones, enumera co-

mo una de ellas, la de conocer de las competencias entre jueces del Distrito federal.

Segun esa disposicion y atendiendo á que la Prefectura de Guadalupe Hidalgo y el Juzgado 3º de lo criminal, están comprendidos dentro del Circuito judicial del Distrito federal, el suscrito entiende que pudiera concluirse legalmente, que dicho Tribunal Superior es el competente para conocer de este negocio.

Sin embargo, esa Suprema Corte no puede hacer esa declaracion, porque equivaldría tanto como á determinar y decir de las atribuciones de ese Tribunal, sobre el que en negocios de la naturaleza como el presente, le es absolutamente ajeno, y no tiene respecto de él ninguna jurisdiccion.

El fiscal cree que en rigor de derecho, de conformidad con lo prevenido en la Constitucion y en consonancia igualmente con la organizacion actual de nuestros Tribunales, esa 1ª Sala debe declararse incompetente para conocer de la competencia que el Juez 3º de lo criminal ha promovido al C. Gefe político de Guadalupe Hidalgo, para conocer de la causa iniciada contra Dionisio Chavez por asalto y robo en despojado.

México, Noviembre 19 de 1873.—*Aztamirano.*

#### *Auto de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Noviembre 22 de 1873.—Como parece al Sr. Fiscal, y por los fundamentos que expresa, se declara esta Sala incompetente para dirimir la competencia iniciada por el Juez 3º de lo criminal á la Gefatura política de Guadalupe Hidalgo.

Devuélvanse en consecuencia sus actuaciones á los jueces competidores, á fin de que ocurran donde corresponda.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia. México, Diciembre de 1873.  
—*Enrique Landa.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por el C. José Domingo Díaz, contra el Juez de 1ª instancia de Huejotzingo, por haber rematado en asta pública, la hacienda nombrada de San Lorenzo Nacatepec.*

### PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

#### C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal, en el juicio de amparo promovido por el C. Domingo Díaz, contra la determinación del Juez de 1ª instancia de Huejotzingo, en virtud de la cual fué expropiado de su hacienda, conocida con el nombre de Nacatepec, cita en jurisdicción de San Martín Tescmelucan, supuesto su estado que es el de alegar, ante V. dice: que la historia fiel del negocio que ha dado origen al presente recurso, está manifestada perfectamente por el quejoso, y justificada con las pruebas que rindió, que son testimonios en forma de los actos á que hacen referencia.

Del estudio de esas pruebas y del de los conceptos vertidos por la autoridad responsable, en su informe de 4 de Julio último, resultan dos hechos innegables: el de haberse rematado la finca mencionada á favor del C. Lic. Fernando Mendizabal, por dos mil pesos, que ofreció al contado, y mil sin causa de réditos, cada año, hasta extinguir el valor total de la finca; que en la retasa que se hizo de ella, se valorizó en cuarenta y un mil y tantos pesos; y el de haber despojado de esa finca á su legítimo dueño, con motivo del remate, no obstante el que estuviera pendiente el juicio de tanteo, ante autoridad competente.

Sobre esos atentados jurídicos, la parte

interesada bastante ha dicho en su alegato; hay pues, que considerar ahora por V. C. Juez, con respecto al remate, que ha sido ilegal á todas luces, puesto que Nacatepec no se vendió en los términos establecidos por las leyes de la materia, sino que se regaló al solicitante, con burla y agravio gravísimo del dueño de ella.

Este agravio, evidenciado en autos, de cualquiera manera que se considere, es una infracción flagrante de las garantías que nuestra gran carta fundamental otorga á todo individuo en su artículo 16, por importar el acto reclamado nada menos que un ataque al derecho de propiedad, que ninguna ley puede favorecer ni indirectamente.

Las que hablan de las ventas judiciales, todas en cuanto cabe, son equitativas, y aunque obligan á perder al deudor una tercera parte del valor legítimo de la casa que se le vende, las otras dos le son garantidas, previniendo al efecto que se den de contado, ó de otro modo racional que concilie los intereses de los acreedores y del deudor común; y en el caso, como se palpa de los justificantes exhibidos, se precisó al deudor á perder mas de la tercera parte del intrínseco valor de su hacienda, y las otras dos fueron cedidas al representante de Mendizabal, para que con parte de sus productos abonara mil pesos al año, sin que consideraran los réditos hasta cubrir el precio ilusorio en que la compró, lo que equivale á que el deudor hubiera de perder su finca, y hasta sus productos, una vez que el comprador se aprovecha cada año de 523 pesos que forman una parte de ellos.

Tal venta como se ha demostrado, es anticonstitucional, porque expropia al C. Díaz de lo que justamente tenía adquirido, con atropello violento de cuantas leyes se hicieron valer á ese respecto. Hay que considerar además, el otro hecho comprobado en autos suficientemente, el de haberse despojado al C. Díaz de la finca, cuando estaba pendiente el juicio de retracto. Como muy bien ha dicho la misma parte interesada en